

# Exigimos un cambio radical hacia la Comunitat Valenciana

**MANUEL MIÑÉS MUÑOZ**

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

**E**l Gobierno de coalición, de inmediata formación, con Pedro Sánchez como presidente, mucho tiene que cambiar en sus relaciones institucionales, con la Comunitat Valenciana para revertir el menosprecio que padecemos.

Debemos exigir al Gobierno central un trato equitativo y no discriminatorio, tanto en financiación como en inversiones prioritarias que permitan dotarnos de infraestructuras en transporte y logística, movilidad metropolitana y, como no, actuaciones hídricas-ambientales que minoren las importantes carencias hidráulicas, puestas de manifiesto en el último caso de gota fría (DANA) que azotó al Levante español y muy especialmente la Vega Baja del Segura en Alicante.

Los informes del IVIE, el BBVA Research o el propio AiREF, dejan patente el maltrato dado a la Comunitat.

La infrafinanciación sitúa a la Comunitat Valenciana en cabeza del déficit de las autonomías. A octubre de 2019, el déficit de la Administración, en sus tres niveles competenciales, alcanzaba 25.917 millones de euros, de ellos 2.576 corresponden a las comunidades autónomas. La tercera parte de esta deuda -898 millones de euros- corresponde al déficit de la Comunitat Valenciana (0'81% del PIBCV). La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, como anteriormente lo manifestó su antecesor, Cristóbal Montoro, admite que Comunitat Valenciana es la más perjudicada por el sistema de financiación autonómico, que aunque caducó en diciembre de 2014 será difícil o quizás imposible el lograr un modelo consensuado, a corto plazo.

Déficit que 'suturado' años tras año por el FLA de Montoro, tan denostado por el tripartito del Botánico, y ahora suplicado por el conseller Vicent Soler, no hace sino anualmente incrementar nuestra descomunal deuda.

La deuda total de la Administración, más la Seguridad Social, alcanzó en octubre de 2019 los 1.173.988 millones de euros, equivalente al 97'65% del PIB. De ella, las comunidades autónomas son responsables de 293.395 millones. La Comunitat Valenciana responde de 47.084 millones, que suponen 9.515 euros por valenciano (récord español de deuda per cápita), que sumado a los 18.845 euros por español, por la deuda de la Administración central, supone la barbaridad de 28.360 euros por cada valenciano. Ello sin contar la deuda contraída por los hogares y empresas, a título particular, con las entidades financieras. Deberíamos trabajar un año y medio gratuitamente, para saldar nuestra parte de deuda.

El PIB de la Comunitat Valenciana, que ascen-

dió a 110.978 millones de euros, tan solo representa el 9'23% del PIB nacional, muy inferior al peso de nuestra población (10'64%)

En cuanto al Índice de Riqueza (PIBCV. /hab.) alcanzamos los 22.179 euros por habitante, que sólo es el 86'75% de la riqueza media nacional (25.564 €/hab.). Somos 3.195 €/hab. menos ricos que el español medio, frente al 136'20% de Madrid, el 129'13% del País Vasco; el 110'26 % de Cataluña; el 109'42% de Aragón... Incluso Castilla-León, con el 93'40%, o Galicia, con el 90'11%, nos superan. Somos el furgón de cola de la economía española.

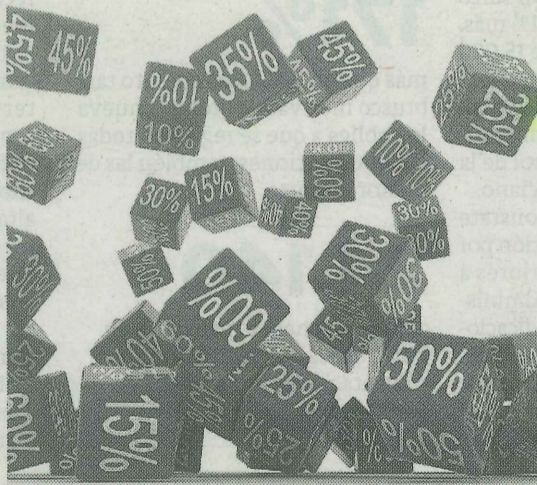
La previsión de crecimiento en la Comunitat Valenciana, según BBVA, se estima para el 2019 en un 1'8% y para el 2020 será el 1'4% sobre el PIB. Recordemos que el 2015 cerró con el 3'5%, el 2016 con el 2'8%; el 2017 con el 3'1%, y en el 2018 con el 2'1%. Sepamos que sólo a partir del 2% de crecimiento económico se crea empleo.

Estudiada la evolución de las licitaciones de la Administración central en la Comunitat Valenciana en el periodo 2012-2018, en octubre 2019 el ratio es demoledor. La licitación por parte de la Administración central en este largo periodo es un 6'02% del total nacional (cuando nuestra población es el 10'64% y nuestro PIB, el 9'23% del nacional). Por el contrario, la licitación en Andalucía alcanza el 12'51%; en Galicia, el 11'28%; en Cataluña, el 10'10%; en Castilla-León, el 8'34%; en Madrid, el 8'72%...

Ximo Puig, el 11 junio 2015, con el PP en la Moncloa dijo: «Queremos un Gobierno que defienda los intereses de los valencianos dentro y fuera de nuestro territorio. Nunca más queremos que se nos trate como ciudadanos

de segunda, ni desde Madrid, ni desde Bruselas. Exigiremos al Estado financiación e infraestructuras para garantizar nuestro autogobierno». El problema ha llegado cuando la Moncloa y el Palau de la Generalitat están gobernados por el mismo partido, y en consecuencia las quejas llevan sordina. ¡Contra Rajoy vivíamos mejor!

Según el índice de la Competitividad Global (GCI), del World Economic Forum (WEF) la competitividad de un país o de una región se sustenta en dos pilares básicos: la seguridad jurídica institucional y las infraestructuras. Las inversiones en infraestructuras se las exigimos al Gobierno central, mientras que la seguridad jurídica es una asignatura pendiente de la Generalitat -solo recordar INTU Mediterráneo, explotaciones mineras de caolín 'paralizadas' en Castellón y Sagunto, terminal de cruceros, Plan Estratégico y Acceso Norte de la APV, etc.-. Son los socios antisistema -Podemos y Compromís- del Consell los que están poniendo trabas a nuestro desarrollo económico. Presidente Puig, cuenta con nosotros para poner fin a tanta inseguridad jurídica.



:: FOTOLIA